EL SISTEMA ACUSATORIO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL GUATEMALTECO

Julio Jerónimo Xitumul

Es importante realizar una breve historia del Sistema Acusatorio para sustentar este tema y posteriormente presentar algunos ejemplos que se producen en el proceso penal guatemalteco. El Maestro Eugene Florián, en su obra Elementos del Derecho Procesal Penal, de la serie de Clásicos del Derecho Procesal Penal, refiere: "El sistema acusatorio material rigió en Grecia y Roma. La base del sistema acusatorio griego y romano descansaba sobre la acción popular en poder de los ciudadanos, con las limitaciones para aquellas personas que no ostentaban tal calidad en su organización política: el acusador por su parte, asumía responsabilidad al ejercer la acción penal, es decir, al presentar la acusación, que es la base indispensable del proceso, que no se concibe sino "*instanti-ampartis*".

De suerte que el juzgador no puede actuar de oficio. El derecho germánico de la Edad Media también adoptó un sistema acusatorio que, a diferencia de los anteriores, se fundaba en la acción privada.

El hecho que caracteriza a ambos procedimientos es la necesidad de que algún ciudadano, es decir, alguien ajeno a cualquier órgano del estado, presente una acusación para habilitar la intervención del tribunal que habrá de decidir la cuestión planteada (*neprocedatiudex ex officio, nemoiudex sine actore*) ello implica, además, que el tribunal sólo puede decidir sobre el caso presentado por el acusador, que constituye el límite de su intervención.

En el juicio oral, público y contradictorio que tiene lugar en virtud de la actividad acusatoria, ambas partes - actor y acusado - se enfrentan en pie de igualdad. De este modo, a la actividad del acusador se pone la actividad defensiva del imputado, mientras que el tribunal actúa como árbitro de la lucha entre las partes. El tribunal sólo ejerce funciones decisorias, propias de la tarea jurisdiccional, y no cumple ningún papel en la investigación del hecho que genera el juicio.

**En el juicio oral, público
y contradictorio que tiene
lugar en virtud de la
actividad acusatoria, ambas
partes -actor y acusado-
se enfrentan en pie de
igualdad.**

Las resoluciones del caso, que depende de él, implican que debe actuar como un árbitro para vigilar la regularidad del procedimiento y decidir sobre las distintas pretensiones originadas en los intereses enfrentados que generan el juicio. El esquema planteado por el enjuiciamiento acusatorio

material histórico reconoce, entonces, al imputado como titular de derechos, que se opone a su acusador en un juicio oral, público y contradictorio, obliga a decidir la cuestión a un tribunal imparcial con fuerte participación popular e impide que sea un órgano estatal quien decida iniciar la persecución penal.

Como se puede apreciar, el modelo y sus presupuestos resultan mucho más respetuosos de los derechos de los individuos que el sistema inquisitivo. Por este motivo, si bien los estados actuales mantienen el principio inquisitivo de la persecución penal pública, reconocen la necesidad de adoptar las formas acusatorias, como único método posible de realizar la función persecutoria respetando las exigencias impuestas por las reglas del Estado de derecho y del derecho internacional de los derechos humanos.

El estudio comparativo e histórico entre los distintos modelos o sistemas de enjuiciamiento penal permite descubrir los presupuestos, fundamentos y valores que dan sustento al modelo - o a sus distintas instituciones -. El reconocimiento de estos presupuestos valorativos resultan de suma utilidad para, ya en la práctica, guiar la interpretación y aplicación de las normas del procedimiento con el objeto de lograr una utilización coherente de las disposiciones del texto legal a través de criterios interpretativos sistemáticos, racionales y respetuosos de las garantías fundamentales contenidas en la Constitución y en los pactos de Derechos Humanos. Finalmente, este análisis permite detectar los presupuestos valorativos de las normas jurídicas y de las instituciones, y, en consecuencia, permite el contraste de esos presupuestos valorativos con los principios fundamentales del estado de derecho moderno.

El Código Procesal Penal, en su mayor parte de artículos contiene disposiciones de un sistema acusatorio, desde hace más de dos décadas que está vigente aún hay mucho que hacer en la práctica para una mejor aplicación del mismo, porque todavía nos encontramos con artículos de corte inquisitivo, y que en su interpretación suele aplicarse a un sistema acusatorio. Al estudiar ciertos textos del citado procesalista en este tema al referirse al sistema acusatorio, en forma sencilla explica: que en este sistema, son las partes los que empujan el proceso penal, de tal suerte que el juez le corresponde resolver lo que éstos le piden, sin que pueda resolver más de lo pedido. En las etapas preparatoria, intermedia y en el juicio, se utiliza este sistema pero en forma mixta, ya que en algunos casos todavía se actúa de oficio, que es una práctica del sistema inquisitivo, que fue propio del anterior Código Procesal, esto porque el código vigente contiene algunas normativas donde se faculta al juez a realizar ciertos procedimientos de oficio y que por consiguiente lo puede aplicar, empero, es aconsejable que el juez o tribunal, que son quienes interpretan y aplican la ley procuren darle viabilidad al sistema acusatorio para ir prescindiendo del sistema inquisitivo. El proceso penal acusatorio, por sus características reviste de mayor imparcialidad por parte del juzgador, porque como lo dice este tratadista: son las partes quienes empujan el proceso y el juez o los jueces tendrán que resolver con base a lo que se les pida y no dar más de lo pedido, pues esto conllevaría a una resolución Extra Petita, que según el Diccionario Consultor Jurídico Magno, de Voces Latinos, de su autor Mabel Goldstein: el juez decide en cuanto a lo que le piden. Se dice del juicio resuelto en desacuerdo con lo pedido o en conflicto con la naturaleza de la causa. Ultra Pe-

tita, lo define el mismo autor: Como por encima del monto reclamado. Por eso, el autor Eugene Florián, al sistema acusatorio lo ubica en tres funciones: la de juzgar, la de acusar y la defensa, e incluye otras funciones, la de la iniciativa y la del impulso procesal, que es típicamente la de instrucción, que en nuestro medio ya quedó en desuso. En otras palabras, se trata aquí de los poderes atribuidos, respectivamente al juez y a las partes. Desde luego, es evidente que el problema sólo surge en la base y en relación con una estructura acusatoria.

En nuestro medio se ha avanzado mucho en el tema, pero aún falta mucho para practicar y aplicar un verdadero sistema acusatorio. En el juicio penal por ejemplo, es aconsejable que el ente acusador realice su función como tal, en el sentido que todo aquello que la ley le permita realizar lo haga, o que el juez lo induzca a realizar su función como ente acusador, como ocurre en las audiencias del debate, respecto a la presentación de peritos y testigos, su presentación las debe llevar a cabo el Ministerio Público, para que declaren en el orden que lo considere pertinente en su estrategia de acusación y no dejar al juez esa presentación (al llamar al estrado a cada uno para que declaren), o en su caso el juez le pida al acusador que llame a sus peritos o testigos para que declaren en el orden que le son de utilidad o por la lógica como le van a servir en su tesis acusatoria. Igualmente sucede con la presentación de documentos, el ente acusador es quien debe enumerar sus documentos en forma resumida e indicar que pretende probar con cada uno de ellos, lo anterior naturalmente a pedido del que dirige el debate, de esa forma también el Fiscal del caso, debe examinar a sus peritos sobre sus dictámenes de conformidad con lo que estipula el Artículo 234 del Código Procesal Penal, y no que el juez realice esa función, ya que a él le corresponde únicamente la dirección del debate y valorar la prueba y emitir su veredicto. Todo lo anterior para que nuestro sistema procesal vaya tomando las características de un sistema netamente acusatorio, para que el proceso penal, sea dinámico, sencillo, transparente y efectivo. El Código Procesal Penal, contiene cantidad de artículos con orientación del sistema inquisitivo, corresponde al juez y a las partes su aplicación o no, o implementar dichas normativas al sistema acusatorio, sin que ello implique variar las formas del proceso, porque son actos que se realizan en presencia de los sujetos procesales y son ellos los llamados a fiscalizar el procedimiento con las protestas o recursos que la misma ley les proporciona. En el caso del ejercicio de la defensa técnica, ésta debe ser más proactiva, es decir, su actuación tiene que ser enmarcada den-

tro de la nuevas corrientes del proceso acusatorio, ya no es suficiente argumentar que es el Ministerio Público, el encargado de destruir la presunción de inocencia de su defendido, si no aportar también prueba para alcanzar y ayudar a la averiguación de la verdad, de lo contrario, cuál sería el objeto de la defensa técnica en el proceso penal, si no propone, el abogado defensor, tiene que actuar buscando como defender a su patrocinado, pedir lo que tenga que pedir, que sea factible, según las circunstancias del juicio, en balde sería su denominación como tal si no cumple con esta noble función.

Al inicio del debate oral y público los sujetos procesales presentan sus alegatos de apertura con argumentos resumidos del caso, por medio de los cuales plantean sus hipótesis, tanto acusatoria como de defensa, alegatos que tienen que contener lo fáctico, probatorio y jurídico, estos alegatos deben realizarse con bastante conocimiento del contenido de la acusación y de igual manera los argumentos de la defensa, no es dable que el ente acusador al presentar sus alegatos de apertura lo haga dando lectura literalmente la acusación y la defensa llevar por escrito su alegato también, son circunstancias que denota la falta de atención, preparación y responsabilidad para asistir al juicio, naturalmente existen excepciones, donde los profesionales están conscientes de su responsabilidad para ese ejercicio y preparan sus alegatos para ese momento, y eso se ve muy bien. Hoy en día en las universidades con facultades de derecho cuentan con catedráticos de derecho procesal penal, que se esmeran en enseñar a sus alumnos estas incidencias del debate, específicamente los alegatos de apertura, para que en poco tiempo lo pongan en práctica en el ejercicio de la profesión. Al retomar el tema del sistema acusatorio dentro del proceso penal y analizar determinados artículos del Código Procesal Penal guatemalteco, se extrae que el mismo contiene normativas de carácter inquisitivo, que algunos se analizan a continuación: El Artículo 182.- en su último párrafo estipula: Tanto el Ministerio Público como el defensor tendrán facultad para dirigir al sindicado las preguntas que estimen convenientes, con la venia de quien presida el acto. **El juez o los miembros del tribunal competente también podrán preguntar.** El Artículo 370. (Declaraciones del acusado). Preceptúa: Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, y le advertirá que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque no declare. Permitirá, en principio, que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación. Podrán

interrogarlo el Ministerio Público, el querellante, el defensor y las partes civiles en ese orden. **Luego podrán hacerlo los miembros del tribunal si lo consideraren conveniente.** Estas normativas contienen disposiciones que facultan al juzgador o juzgadores, a interrogar al sindicado en la fase preparatoria y al acusado en el juicio, lo que conlleva la práctica de un sistema inquisitivo en un proceso acusatorio, puesto que no es aconsejable que el juez intervenga

En nuestro medio se ha
avanzado mucho en el
tema, pero aún falta mucho
para practicar y aplicar un
verdadero sistema acusatorio.

en un interrogatorio, en virtud, que el interrogatorio por parte de él, puede incidir, para ligar a proceso o no a un sindicado o para condenar o absolver a un acusado, o sea su intervención puede ser determinante en la situación jurídica del procesado, donde el mismo juez o tribunal tenga que resolver o emitir una sentencia, situación que no es coherente con los principios procesales y garantías constitucionales. En el debate puede suceder también, que el acusado decida declarar y después de su declaración la normativa dispone, que pueden interrogarlo el Ministerio Público, el defensor y las partes civiles, pero también faculta a los miembros del tribunal, si lo consideran pertinente, podrán interrogarlo, como puede interpretarse, los jueces si lo desean pueden interrogar al acusado, porque la normativa, así lo indica, no hay impedimento para no hacerlo, pero mucho mejor no hacerlo. En un sistema acusatorio el interrogatorio debe corresponder a las partes del proceso y no al juez que dirige el debate, que únicamente velara sobre la correcta intervención de las partes en el interrogatorio o en el contra interrogatorio y resolver cuando sea requerido por las incidencias que se dan en las audiencias del juicio, aunque hoy en día ya no se hace uso de esa facultad, pero que mejor que esta normativa y otras fueran objeto de reforma o derogatoria, para ajustarlo al sistema acusatorio.

También hay disposiciones donde el juez puede actuar de oficio para la realización de alguna diligencia probatoria como el contenido en el Artículo 381. (Nuevas pruebas). **El tribunal podrá ordenar, aún de oficio,** la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables

o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de cinco días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes.

Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia, cuando fuere posible. Esta disposición es otro de los ejemplos que es necesario analizar, puesto que se delega en el tribunal una actividad que es exclusiva de los sujetos procesales, puesto que el juez o tribunal puede incorporar prueba, que en un momento dado pueda perjudicar o favorecer al acusado. Cuáles serían los resultados: si por la incorporación de ese medio de prueba, resultare una segura condena o absolución para el acusado, sin que la parte acusadora o la defensa hubieran pedido esa incorporación de prueba, la decisión del tribunal resultaría ilegítima y viciada, contrariando lo dispuesto en el artículo 181 del Código Procesal Penal, en cuanto a la objetividad de su obtención. El juez o tribunal al actuar de oficio y realizar esta función, quedaría en descrédito ante el Ministerio Público, el acusado y su defensa, dependiendo del resultado de esa valoración probatoria, puesto que en ese instante está realizando tres funciones, la de acusar, defender y la de juzgar, porque definitivamente promueve prueba para lograr un veredicto.

El Artículo 388. (Sentencia y acusación). La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado.

Normativa que faculta al juez el cambio de calificación jurídica de los hechos contenidos en la acusación planteada para antes de dictar sentencia, con la excepción, si dicha modificación a la calificación jurídica, fuera favorable al reo, pero no en caso contrario (contrario sensu), es otra clara intervención del tribunal en un proceso que corresponde a las partes.

En relación a la reapertura del debate contenido en el Artículo 384. (Reapertura del debate). **Si el tribunal estimare imprescindible**, durante la deliberación, recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer, a ese fin, la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará a las partes a la audiencia, y se ordenará la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará lim-

itada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de ocho días. Con la reapertura del debate se suspende la deliberación del tribunal y se recibe nuevas pruebas, que a juicio del tribunal sean necesarias, para volverse a discutir y luego el tribunal reunirse nuevamente a deliberar sobre los medios de prueba incorporados. Actividad procesal que pone en estado de indefensión al acusado, no obstante que también puede favorecerle en una nueva discusión de su situación jurídica, además existe la etapa de nuevas pruebas, que es donde debe promoverse esta

**Si el tribunal estimare
imprescindible -durante la
deliberación- recibir nuevas
pruebas o ampliar las
incorporadas, podrá disponer,
a ese fin, la reapertura
del debate.**

prueba. En la actualidad, es casi probable que esta diligencia ya no se realice por los órganos jurisdiccionales. En el hecho Notorio, es otro caso similar, se encuentra regulado en el Artículo 184. (Hecho notorio). Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. **El tribunal puede, de oficio**, provocar el acuerdo.

Este procedimiento faculta al juez o tribunal a provocar que el asunto se resuelva por esta vía, haciendo a un lado la prueba y declarando comprobada la acusación formulada contra el enjuiciado, circunstancia, que aunque al tribunal le asigna la disposición legal de provocar este procedimiento, no se considera que sea aconsejable, por lo ya indicado. Otro de los ejemplos, es respecto al peritaje contenido en el Artículo 225. (Procedencia). **El tribunal podrá ordenar peritación, ha pedido de parte o de oficio**, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte técnica u oficio. No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber sido requerido por la autoridad competente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posea. En este caso, rigen las reglas de la

prueba testimonial. Donde la disposición procesal faculta al tribunal a realizar esta diligencia dentro del debate. En ese orden de ideas, estas normativas tienen carácter inquisitivas y su aplicación contraría un sistema acusatorio, empero, hoy en día ya la mayor parte de tribunales han dejado de aplicar estas disposiciones y procedimientos, con ello están fortaleciendo el proceso penal para hacerlo más justo, transparente e imparcial. Este connotado procesalista, al referirse al sistema acusatorio respecto a la sentencia, refiere: Si todo el material que debe servir al juez para formar su convicción y dictar la sentencia procede de las partes tenemos el principio acusatorio, según el cual el juez no puede proceder sino a consecuencia de una acusación presentada por otro órgano público o privado. Si, en cambio, el juez goza de poderes para iniciar el proceso, instruirlo y ejecutarlo y ejecutar la prueba; en otras palabras, si la función de la iniciación del proceso y de la instrucción está en manos del juez, tenemos el principio llamado inquisitorio. Es de hacer mención que existe en el Código una cantidad de artículos que contienen disposiciones del sistema inquisitivo, que hay que ir acomodando a un sistema acusatorio, debido a esto es que los estudiosos del derecho, coinciden en indicar que el Código guatemalteco corresponde a un sistema mixto. De acuerdo a lo que se ha venido analizando, respecto a los sistemas procesales, podría decirse que el Código Procesal Penal, su normativa está integrada por un sistema mixto, porque contiene disposiciones del sistema inquisitivo y acusatorio, por lo que hace que su aplicación corresponde a ambas corrientes, se encuentran ciertos actos que corresponden a la intervención del juez y otros a los sujetos procesales dentro del juicio, pero en su contenido pone al juez como quien tenga la facultad de realizar ciertas diligencias o proposición de prueba en caso que los sujetos procesales no la pidieran, por ello, es muy común encontrar frases "como de oficio el juez o tribunal podrá hacer determinada diligencia". En la etapa preparatoria o intermedia, en otros casos, que puede interrogar al acusado" o hacer modificaciones al auto de procesamiento.

Este sistema mixto ha sido conocido como tercer sistema, las características de este sistema se resumen en los siguientes: a) que el juez cumple una función pública y permanente pero le está vedada, salvo casos excepcionales, la posibilidad de apoderarse de oficio; b) como es necesario que haya una acusación se instituyó para ello un cuerpo de funcionarios llamado Ministerio Público, como el ente que se encargaría de la persecución penal; c) el sistema de la prueba legal fue abolido y la prueba se rige

por el principio de íntima convicción, el juez aprecia libremente el resultado de la prueba aportada al debate sin que ningún criterio artificial ligue su convicción y la instrucción se desdobra en dos fases: la preparatoria basada en el sistema inquisitorio, y la definitiva, que tiene las características del sistema acusatorio.

En el procedimiento penal guatemalteco, el Ministerio Público presenta su memorial de acusación y después de realizarse la audiencia para decidir si existe fundamento serio para llevar a juicio a una persona, y si procede la apertura a juicio, aportará posteriormente las pruebas con que va a sustentar su acusación en el juicio, con el propósito de obtener una sentencia favorable. La defensa también hace lo suyo, pero con menos intensidad, porque considera que el ente acusador es quien debe destruir la presunción de inocencia de su defendido y argumenta en cuanto a esa presunción y que se respeten las garantías constitucionales de su patrocinado, no obstante, que los sujetos procesales son los llamados a presentar sus pruebas en la audiencia del debate y con sus respectivos fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos, tratarán de convencer al tribunal para obtener una sentencia de acuerdo a sus intereses. Empero, en la práctica es muy común escuchar en los alegatos de apertura de la defensa, en manifestar, que es el Ministerio Público, el encargado de destruir la presunción inocencia del acusado y la defensa de desvirtuar esa acusación, argumento que no es atendible en un sistema acusatorio, donde las partes empujan el proceso y aportar la prueba pertinente y argumentos precisos, para que el juez o tribunal forme su propia convicción para dictar la sentencia.

Este autor para sustentar el principio acusatorio se ampara en una conocida máxima latina: *judexneprocedat ex officio* (el juez no puede proceder más que a instancia de parte) *nemojudex sine actore* (no hay juez sin actor); *judexneeat ultra petitapartium* (el juez no debe conceder más de lo que pidan las partes); *judexsecundumallegata et probata a partibus indicare debet* (el juez debe juzgar según lo alegado y probado por las partes).

Al relacionar este principio con la historia, en Roma regía el principio acusatorio: el juez no tenía facultades instructoras, antes bien, su función si limitaba a dirigir la vista; tampoco los testigos eran interrogados por él, eran aportados por las partes y eran ellas las que hacían el interrogatorio. En el proceso penal acusatorio de los romanos, quien presidía y juzgaba no tenía poder de instruir ni de interrogar.

Lo que queda bien evidente a través de la historia del derecho penal, es que el principio inquisitivo es posterior al acusatorio, surge al declinar éste por obra de la iglesia. El hecho de haberse impuesto el principio inquisitorio en el horizonte del proceso penal obedeció a la modificación de las circunstancias; con la decadencia de Roma, los ciudadanos habían perdido el orgullo de los derechos y de los deberes que les eran inherentes, no se preocupaban de la cosa pública por lo que dejaron de interesarse en los procesos.

Por todo eso la represión no hubiera tenido lugar de haber continuado al cuidado de los ciudadanos. El interés público reclamaba que surgiera y que se afirmara una fuerza nueva y autónoma; pedía que el juez además del cometido de dirigir y juzgar, tuviese el de iniciar el proceso y principalmente la función de disponer todo lo necesario para la investigación de los hechos por medio de la prueba sin necesidad, o independientemente de la iniciativa de las partes; que tuviese, en suma, la iniciativa procesal.

En los tiempos modernos la cuestión de si debe acogerse en el proceso el principio inquisitivo o el acusatorio sólo puede plantearse, cuando el proceso o determinados momentos del mismo estén regulados y se desenvuelvan según la forma acusatoria. No es imaginable una forma acusatoria en la que las partes no tengan poderes instructorios, pero si es imaginable que los tenga el juez, en consecuencia, el problema se contrae a si éste debe poseerlos.

Por de pronto podemos decir que el proceso moderno tiende a conservar y desarrollar la organización acusatoria, pero también, al mismo tiempo, a investir al juez de poderes autónomos y dotarlo de iniciativas procesales, no tanto para la incoación como para la instrucción del proceso.

Esta tendencia especialmente en su segunda manifestación parece totalmente justificada, por lo que cabe esperar que los poderes de la magistratura se ampliaran cada vez más, ya que representa un órgano imparcial, una fuerza que sirve a los intereses generales, superiores a la de las partes, y que deben coordinarse con los fines del proceso. En efecto si la sentencia ha de estar basada sobre la consideración objetiva de los acontecimientos, es justo que el juez tenga el poder de ordenar por propia iniciativa las investigaciones probatorias para la averiguación de los hechos que está llamado a calificar. La verdad material sería de otra suerte inasequible.

Cuando el juez está investido de poderes instructorios propios, obra en el proceso como una fuerza

inmanente y autónoma, que actúa por encima de las partes y encarna en la forma más genuina el interés general, así es como se cumple los elevados fines públicos del proceso penal. La forma acusatoria puede y debe estar animada por el principio inquisitorio.

El principio acusatorio se manifiesta, inequívocamente, por la facultad que tienen las partes y sus defensores de presentar peticiones y exponer lo que mejor les convenga. Además, por regla general, el juez no puede resolver sino después de haber oído al Ministerio Público, salvo excepciones, y en el debate sólo tras haber oído además de éste, a las partes privadas. Principio que sigue nuestro procedimiento penal guatemalteco.

De otra parte, el principio enunciado tiene un sintomático y profundo reconocimiento en materia de recursos, donde se atribuye valor jurídico a la renuncia de alguna de las partes y, en particular, del Ministerio Público. El mismo principio determina también los límites de la resolución de la apelación, pues está circunscrita a los motivos que presente las partes.

Por tanto, se puede concluir indicando que nuestro proceso penal es de forma acusatoria, o, con más exactitud, es un proceso de partes, inspirado preferentemente en el principio inquisitorio, el cual, sin embargo, encuentra ciertas limitaciones en la voluntad de las partes mismas (principio acusatorio).

SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL

Es importante compartir este material sobre el origen del modelo Acusatorio Adversarial formal, porque es necesario saber que han existido tres tipos de sistemas de derecho procesal penal: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto.

El sistema acusatorio, que fue el primero en aparecer históricamente, nace en Grecia, de donde se extendió a Roma y sus orígenes se vinculan con una concepción democrática, tanto es así que fue adoptado por los antiguos regímenes democráticos y republicanos, y prevaleció hasta el siglo XVIII; cuando fue sustituido por el sistema inquisitivo, el cual se funda en el primitivo de que el proceso no es otra cosa que un duelo entre dos rivales, a uno de los cuales el juez debe finalmente darle la razón. Inicialmente tenía lugar de igual manera tanto en los asuntos civiles como en los penales. Más tarde, a consecuencia de la naturaleza de sus respectivos objetos, el uno se separó del otro, aun cuando siguió existiendo una gran semejanza entre ambos.

El inquisitivo, tuvo su antecedente en el procedimiento extraordinario del Bajo Imperio Romano llamado así porque el proceso no se desarrollaba según las reglas del procedimiento acusatorio que era el ordinario. Este sistema tenía el procedimiento en un lugar secreto, por escrito y no era contradictorio; la prueba era objeto de una reglamentación estricta denominada sistema de prueba legal, debiendo el juez ordenar al inculpado cuando se produjera en su contra ciertos cúmulos de ellas, por ejemplo: la declaración de un testigo no bastaba para que el juez pudiera condenar a un inculpado, pero dos testimonios concordantes eran suficiente para ello; el juez debía absolver o condenar según que en la intimidad de su conciencia creyese o no en la inocencia del inculpado, es decir la íntima convicción del juez.

Este modelo de la adversidad empezó a desarrollarse en Inglaterra durante el siglo XVIII precediendo al CommonLaw (siglo XVII).

Como figura jurídica surge por el ideólogo de esta normativa modelo que fue el inminente jurista Don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, quien llegó al continente americano como exiliado de España en la época de Franco y quien fue el primer Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal, organización no-gubernamental, formada por procesalistas de Latinoamérica, España y Portugal, dedicados al estudio del Derecho Procesal Penal, con el objetivo de fomentar la unificación legislativa a nivel Iberoamericano, cuyos estatutos fueron aprobados en la Primera Jornada Latinoamericana en Derecho Procesal en el año 1957.

Tanto Don Niceto, Jorge Clariá Olmedo, Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler, coincidieron en la necesidad de crear una uniformidad legislativa latinoamericana que era una vieja aspiración de muchos juristas de nuestro continente y porque además este fue el sueño de algunos grandes hombres y fundadores de nuestros países o nuestras sociedades políticas. Las ideas de los juristas de la región se fundamentaban en que los países de la región compartían las mismas problemáticas como consecuencia de la vigencia de los sistemas de tipo inquisitivo o mixto, cultura de forma de vida similar.

En síntesis, este modelo se basa en el contradictorio de las partes en el juicio penal o debate oral y público, su característica por excelencia, radica en que las partes deben argumentar sus pretensiones y el juez debe resolver sus peticiones con fundamento a las pruebas y alegatos sustentados debidamente, de allí bien su origen y nombre, que se refiere al adver-

sario en un pleito o enfrentamiento fáctico, jurídico y valorativo de la prueba sometida al juzgador o juzgadores.

El Diccionario Consultor Magno, al referirse al principio de contradicción, lo resume de la manera siguiente: Principio que deriva de la cláusula constitucional que consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos que

**Lo que queda bien evidente
a través de la historia del
derecho penal, es que el
principio inquisitivo es
posterior al acusatorio.**

conlleva la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución sin que previamente hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por ello.

CONCLUSIÓN

En nuestro medio tanto en la fase preparatoria, intermedia como en el debate, todavía se utilizan términos del sistema inquisitivo para referirse a algún pasaje de una audiencia o una actividad procesal, por la razón, que existen en nuestro Código Procesal Penal, artículos que lo contienen, no obstante que ha venido desarrollándose para hacerlo transparente, efectivo y sencillo, según la visión que sus impulsores tenían al momento de crear este código. Este Código Procesal Penal, en los últimos años ha tenido que sufrir ciertas reformas para adecuarlo a un sistema acusatorio. En la práctica estas reformas al procedimiento, han sido de gran beneficio para el sistema de justicia, para lograr al final un sistema procesal basado en el sistema acusatorio en su totalidad, ya que en la práctica es notorio que se está prescindiendo de la aplicación de normativas de corte inquisitiva.

Las nuevas generaciones de profesionales del derecho tendrán la oportunidad de consolidar este sistema, para lograr un procedimiento más garantista, práctico y eficiente, que los obligará a prepararse en el área de la oratoria forense, para poder sustentar sus argumentos en cualquier diligencia de carácter penal y procesal penal.

BIBLIOGRAFÍA:

- Figueroa Sarti, Raúl, “Código Procesal Penal”, Décima Quinta Edición 2012.
- Florián, Eugene, “Elementos del Derecho Procesal Penal” Vol. 1. Editorial Jurídica Universitaria, 2001.
- Material de Apoyo “Valoración del Modelo Acusatorio Adversarial Formal, en el Derecho Procesal Penal Dominicano”
- Varios Autores, “Diccionario Océano”, Editorial Océano, 1995.
- Varios Autores, “Mentor Interactivo, Enciclopedia Ciencias Sociales”, Editorial 2000.
- Catalina Sazo Muralles. Tesis: Limitaciones a la Judicatura y Debilitamiento del Sistema Acusatorio en el Proceso Penal Guatemalteco.

Sobre el autor

M.A. JULIO JERONIMO XITUMUL

Juez del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala con 17 años de laborar en el Organismo Judicial.